

Santiago, diez de enero de dos mil veinticinco.

Al escrito folio N° 209: atendido el estado procesal de la causa, no ha lugar.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dicta sentencia definitiva en la cual, en el aspecto penal, rechaza la excepción de prescripción opuesta por la defensa de los acusados y condena a **ÁNGEL NICANOR BUSTOS FARÍAS**, como autor del delito de secuestro con grave daño de José Lazcano Campos, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. En tanto que, por su responsabilidad en el mismo ilícito, condena como encubridores a **HERNÁN ALEJANDRO DÍAZ CARREÑO, LUIS PATRICIO PANTOJA CANALES, JORGE EDUARDO MANRÍQUEZ FERNÁNDEZ Y PEDRO GUILLERMO LEVA DENEGRI**, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

El referido fallo condena también a **ÁNGEL NICANOR BUSTOS FARÍAS, HERNÁN ALEJANDRO DÍAZ CARREÑO, LUIS PATRICIO PANTOJA CANALES, JORGE EDUARDO MANRÍQUEZ FERNÁNDEZ Y PEDRO GUILLERMO LEVA DENEGRI**, como autores del delito de inhumación ilegal en la persona de José Lazcano Campos, ocurrido entre el 5 y 6 de junio de 1983, a cada uno de ellos, a la pena de **SESENTA Y UN DIAS** de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 6 UTM.

En todos los casos, además de las penas corporales, les aplica las penas accesorias legales del caso, el pago de las costas de la causa y decreta su cumplimiento efectivo al no concederles penas sustitutivas, a excepción de **DÍAZ**



CARREÑO, PANTOJA CANALES Y MANRÍQUEZ FERNÁNDEZ, a quienes se les concede la libertad vigilada intensiva.

En el mismo fallo, en el plano civil, el referido Ministro instructor, sin costas, accede a la demanda formulada en contra del Fisco de Chile, condenándolo, al pago de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000) a María Alejandra Lazcano Campos, suma que se reajustará conforme al alza de los precios al consumidor desde la fecha de esta sentencia hasta su entero pago y devengarán, en caso de mora, intereses corrientes para operaciones reajustables.

Impugnada esa decisión, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, luego de desestimar el recurso de casación formal del sentenciado Bustos Farías, confirma con declaración el fallo recurrido, condenando a **HERNÁN ALEJANDRO DÍAZ CARREÑO**, como autor del delito de secuestro con grave daño cometido en la persona de José Lazcano Campos, a pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, confirmando las demás decisiones adoptadas en el aspecto penal y, aprueba en lo demás consultado el fallo recurrido.

La misma sentencia, confirma el fallo en la condena civil.

Finalmente, contra esta última sentencia se dedujeron los recursos de casación que pasan a examinarse, todos respecto de los que se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:



1º) Que el apoderado de Ángel Nicanor Bustos Farías interpuso recurso de casación en la forma, alegando como motivo de invalidación las causales N° 9 y 12 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

En lo relativo al vicio de casación en la forma contemplado en el artículo 541 N° 9 del código procedimental, acusa que la sentencia en la parte apelada hace uso arbitrario y equivocado del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal y artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, ya que precisamente la facultad que dichas normas establecen –de no resolver la casación formal– se debe ejercer cuando aquellos vicios denunciados en la sentencia de primera instancia, son resueltos en definitiva por la vía de la apelación, lo que no acontece en la especie, con lo que, el fallo recurrido, al no hacerse cargo de la nulidad formal denunciada, no hace sino confirmar la ausencia de consideraciones de la sentencia de primera instancia en cuya virtud se dan por probados los hechos atribuidos a su representado, sin explicar cómo se llega a la convicción de culpabilidad del sr. Bustos Farías.

En lo que atañe a la causal contemplada en el N°12 del artículo citado, denuncia haberse omitido durante el juicio la práctica de un trámite dispuesto expresamente por la ley bajo sanción de nulidad, vicio que se configura, al existir dos informes fiscales, contradictorios entre sí y respecto de uno de los cuales no se dio cumplimiento al artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, pese a ser desfavorable a su representado, incumpléndose con ello también, lo dispuesto en el artículo 69 inciso segundo del mismo cuerpo legal. Agrega que la intervención de la defensa en la contestación de un informe desfavorable del Fiscal es un trámite esencial dispuesto concreta y expresamente en la ley, cuya omisión esta



sancionada con la nulidad, la que fue expresamente solicitada por escrito previo a la vista de la causa y se alegó en estrados, cuestión de la que el fallo recurrido no se pronuncia.

Por estas causales solicita que se anule la sentencia y se dicte la correspondiente de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley;

2º) Que, con relación a la causal de nulidad formal del artículo 541 N°9 del Código de Procedimiento Penal, conviene dejar sentado que ésta se configura cuando la resolución no contiene los basamentos en cuya virtud se dan por comprobados o no los hechos atribuidos a los inculcados, o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, eximirse de responsabilidad o atenuar ésta; vale decir, cuando no se desarrollan los razonamientos por los cuales se emite pronunciamiento con relación al asunto sometido a la decisión del tribunal. Por ello, el motivo de invalidación que se alega tiene un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo para comprobar si existen o no los requerimientos que compele la ley (SCS Rol N° 20616-18 de 14 de enero de 2021; Rol N° 33547-18 de 23 de agosto de 2021; Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021 y 33661-19 de 25 de junio de 2022);

3º) Que no está de más recordar, que la exigencia del legislador respecto de la inclusión de los razonamientos del juez fallador en sus dictámenes cumple el objetivo de evitar arbitrariedades en sus resoluciones, y es a la luz de este pensamiento que se han contemplado las normas relativas a los contenidos de las sentencias y, sobre todo, la sanción a su vulneración a través del artículo 541 N °



9 del Código de Procedimiento Penal, por ser la fundamentación de las sentencias una garantía de la correcta administración de justicia;

4°) Que, del estudio de la sentencia impugnada, se constata que ella no adolece de las falencias denunciadas, en los términos acotados en la reflexión anterior, pues en su fundamento sexto, desestima las alegaciones de los apelantes y aquellas contenidas en el recurso de nulidad formal al no advertir falta de pronunciamiento en la sentencia de primer grado respecto de alguna de las cuestiones debatidas durante la secuela del procedimiento;

5°) Que, en relación con el vicio denunciado, es conveniente recordar que lo que estatuyen las normas que se dicen infringidas por la recurrente, en relación con la forma de extensión de las sentencias, es que el pronunciamiento contenga las reflexiones de hecho que le sirven de apoyo, sobre la base de la discusión planteada en el proceso. De esta manera, no resulta posible admitir la solicitud de nulidad de la sentencia dictada con miras a obtener una nueva estimación de los hechos para obtener una conclusión distinta a la de la instancia, ya que ello escapa a un motivo de nulidad como el presente.

Por lo expuesto y dado que el fallo que se impugna ha cumplido con las exigencias que se denuncian omitidas, lo que se advierte de su examen, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, resulta que los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio, desde que más que la ausencia de consideraciones, se reprueba la fundamentación de los jueces de la instancia para decidir de la forma en que lo han hecho, por lo que no ha



podido configurarse la causal de invalidación formal esgrimida, la que habrá de ser desestimada.

En estas circunstancias el arbitrio en examen no podrá prosperar, en lo que respecta a la causal en análisis;

6°) Que tampoco podrá prosperar el motivo de nulidad formal previsto en el artículo 541 N°12 del Código de Procedimiento Penal, desde que el trámite de conferir traslado a los reos del dictamen del Fiscal es sólo procedente en los casos de opinión desfavorable de dicho funcionario, lo que no ocurre en autos, desde que se solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia; pues no puede entenderse que sea desfavorable el hecho de rechazar los argumentos de la defensa o pedir que se mantenga una condena, ya que en dicho evento, la regla general sería siempre la de cumplir con dicho trámite, previsto como excepcional; en consecuencia, debe entenderse que sólo es opinión desfavorable la que solicita una condena para el reo que ha sido absuelto, un aumento de la sanción impuesta o una pena más gravosa.

A mayor abundamiento la omisión de dar traslado al informe del Fiscal, no acarrea la nulidad del acto, por cuanto lo exigido en el artículo 69 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, es el cumplimiento de las disposiciones concernientes a la intervención del Ministerio Público en los actos en que ella es obligatoria, lo que aconteció en la especie, por cuanto, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 513 del mismo texto legal, se solicitó informe al Fiscal, el que fue oportunamente evacuado, de modo que el presente arbitrio, será desestimado.



II.-EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACION EN EL FONDO.

7º) Que, previo a entrar al análisis de los recursos, conviene precisar aquellos hechos asentados en la instancia, los cuales están puntualizados en el considerando segundo del fallo de primer grado y que el Tribunal de Alzada mantiene, a saber:

“El día domingo 5 de junio de 1983, José Renato Lazcano Campos, fue detenido en la madrugada en una quinta de recreo ubicada en la ciudad de Los Andes, por funcionarios de Carabineros de Chile, en virtud de registrar una orden de aprehensión, siendo conducido al cuartel de la Comisaría Judicial de Los Andes de la Policía de Investigaciones, sin que quedara registro oficial alguno de esta derivación por parte de Carabineros de Chile ni de su ingreso como detenido por parte de los funcionarios que lo recibieron en la aludida Comisaría Judicial y sin que se adoptara ninguna conducta tendiente a ponerlo a disposición del Tribunal competente. En tales circunstancias, Lazcano es encerrado por personal policial en los recintos del calabozo, entre los cuales se encontraba un funcionario policial que anteriormente había intentado detenerlo, sin éxito, debido a que Lazcano había logrado zafar y huir de dicho funcionario. Encontrándose el detenido en el calabozo, personal policial lo interrogó y le propinó malos tratos, falleciendo en ese momento y lugar y sin que entretanto se adoptara ninguna acción tendiente a auxiliarlo o trasladarlo de manera inmediata hasta algún establecimiento de salud. Luego, para encubrir su muerte y las circunstancias en que ella se produjo, el cadáver fue trasladado en horas de la noche por los efectivos policiales en un carro policial, hasta un sector de la zona norte, ubicado



entre La Ligua y Los Vilos, para ser inhumado sin sujeción a ninguna formalidad, no pudiendo determinarse a la fecha, el lugar exacto donde yacen sus restos”.

A juicio de los sentenciadores de instancia, tales hechos descritos configuran la existencia de los delitos de secuestro con grave daño y de inhumación ilegal de la víctima ya indicada, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 141 y artículo 320 del Código Penal, vigente a la época de los hechos;

8°) Que los sucesos así descritos fueron calificados por la sentencia de primera instancia en razonamiento noveno, como de lesa humanidad, toda vez que: *“Que, en este sentido, los antecedentes de autos demuestran que los ilícitos objeto de la acusación corresponden a crímenes de lesa humanidad, puesto que están insertos en un ataque generalizado contra la población civil, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima. En el presente caso lo preponderante deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, correspondió con una política estatal de control del orden público que autorizó a los agentes del Estado para detener, mantener encerrados, maltratar y privar de la vida a los ciudadanos, en la especie a una persona en situación de manifiesta vulnerabilidad, por su condición socio-económica, utilizando para ello los medios dispuestos a la institución, en la especie, los calabozos y los vehículos policiales estatales. A ello se suma, el prolongado silencio que operó después de la comisión de los hechos punibles, la negativa de información requerida por la hermana de la víctima durante los días siguientes e incluso la falsedad de los antecedentes entregados por Carabineros de Los Andes, manifestada en el proceso seguido por presunta desgracia en que*



aseguró que revisado el libro de novedades de la Guardia se pudo constatar que José Renato Lazcano Campos, había sido detenido por Carabineros, el día 5 de junio del año en curso, “por sospechoso”, a las 04:30 horas, conjuntamente con otros individuos, los que fueron “puestos en libertad” a las 09:45 horas por no haber méritos en su contra, todo lo cual pone de manifiesto que los agentes policiales contaron al menos con el beneplácito del aparato estatal que controlaba el orden público. En concordancia con lo razonado, el Estado de Chile reconoció a la víctima como víctima de violación a los derechos humanos”;

9°) Que la defensa del sentenciado Ángel Bustos Farias deduce recurso de casación en el fondo, fundado en las causales 5 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

La primera de las causales las relaciona con el inciso 2° del artículo 434 y el artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto la sentencia rechaza la alegación de prescripción de la acción penal intentada por la defensa del condenado. Para justificar su pretensión argumenta que la aplicación del Derecho Internacional no impide la vigencia de la prescripción, ya que las circunstancias en que se produjeron los hechos investigados no se enmarcan dentro de los conflictos en que debe hacerse aplicación de los tratados que la vedan y que la sola calificación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, como delito de lesa humanidad, no se encuentra avalada por los antecedentes que obran en el proceso, los cuales dan cuenta de que se trata de un episodio policial, si se quiere imprudente e irreflexivo, pero exento de las motivaciones de persecución o represión política o de otra índole como las que ocurrieron durante los años setenta.



Agrega que no todo delito cometido por agentes del Estado a partir del 11 de septiembre de 1973 es un delito de lesa humanidad, sino que el delito “en concreto” debe estar vinculado con un “ataque generalizado o sistemático”, el cual ha de obedecer a una “política de Estado”, como se desprende del artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y de los artículos 1° y 2° de la Ley N°20.357, de 18 de julio de 2009, lo que no acontece en la especie.

Respecto de la segunda de las causales alega que la sentencia ha cometido un error de derecho al tener por configurada la participación de su representado como autor, no obstante que no existen elementos probatorios que la sustenten, desde que las presunciones judiciales fundantes de esta decisión no son múltiples, ni graves, tampoco precisas ni concordantes, violándose de esta manera las leyes reguladoras de la prueba, en específico los artículos 456 bis y 488 del Código de Procedimiento Penal.

Concluye solicitando que se anule el fallo impugnado y en reemplazo se dicte otro que absuelva a su representado decretando la prescripción de la acción penal;

10°) Que, de la lectura del arbitrio en análisis, surge que el recurso es impreciso en su construcción, ya que alega por una parte una ausencia de responsabilidad penal, y de otra una responsabilidad existente, pero prescrita, lo que desde ya atenta contra el éxito de un recurso de derecho estricto.

En tal sentido, las alegaciones de no haberse acreditado suficientemente su participación, además de la solicitud expresa de absolución, son incompatibles con la petición de declarar prescrita la acción penal, que supone, precisamente, una responsabilidad criminal existente y establecida en el juicio.



En conclusión, lo que el compareciente empieza por desconocer, termina siendo aceptado, de lo que se colige que el arbitrio de nulidad sustancial en estudio contiene motivos que son incompatibles entre sí, basados en supuestos distintos, contradictorios e inconciliables, los que se anulan recíprocamente y que, consecuentemente, son ajenos al recurso de derecho estricto que es el de casación en el fondo, lo que conduce a su rechazo;

11°) Que, por otra parte, tanto el recurso de casación en el fondo deducido por la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como el de la querellante, se sostuvieron en los mismos fundamentos y mismas causales de invalidación contenidas en el artículo 546, numerales 1° y 7° del código adjetivo, por lo que serán analizados en forma conjunta

Respecto de la primera de las causales, denuncian la infracción de los artículos 7, 15, 17, 18, 21, 50, 52, 68, 69, 141 del Código Penal, los artículos 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en conexión con los artículos 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, el artículo 6 literal c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, los artículos 7 N°1 (f), (h) e (i), 25 y 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los artículos 1°, 2°, 8°, 25° y 63° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 9° de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los artículos I (b), II, y IV de la Convención



Interamericana sobre desaparición forzada de personas, además de las normas de *ius cogens*, que en lo pertinente, fundamentan las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad, como son la persecución, tortura y secuestro con grave daño (desaparición forzada); al condenar al imputado Pedro Guillermo Leva Denegri, como encubridor del delito de secuestro con grave daño de la víctima Lazcano Campos, en circunstancias que debió sancionársele como autor del referido ilícito, por cuanto en autos obran probanzas que constituyen presunciones judiciales que cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 1° y 2° del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, las cuales permiten establecer la participación, en calidad de autor, de Leva Denegri, toda vez que se acreditó que el acusado se encontraba de guardia en la unidad mientras interrogan al detenido, mediante apremios que le ocasionaron la muerte, siendo su conducta funcional para la perpetración del ilícito.

Terminan solicitando que se anule la sentencia recurrida y se condene a Pedro Guillermo Leva Denegri, en calidad de autor del crimen ya señalado, en grado consumado, imponiendo la pena que legal y proporcionalmente corresponda a la gravedad del delito cometido;

12°) Que, antes de entrar al análisis cabe señalar que la sentencia, respecto de la participación de Leva Gutiérrez, en el párrafo tercero de su considerando décimo cuarto señala: *“Que estos mismos antecedentes probatorios reseñados en el párrafo precedente, sumado a que el encausado Leva reconoce que escuchó que discutió lo ocurrido entre los funcionarios Hinojosa, Lira y Bustos y que éstos decidieron ocultar el cadáver, y que Angel Bustos expresa que Leva se encontraba en la unidad policial al tiempo en que se encontraba el detenido*



Lazcano, permiten tener por establecida la participación de Leva en el delito de secuestro con grave daño, pero recalificándola a la de encubridor. En efecto, no cabe duda que Leva no tuvo participación en el hecho como autor ni como cómplice, ya que éstos actúan con anterioridad o simultáneamente al hecho. En cambio, la actuación de este acusado se inició con posterioridad al mismo, es decir, después de consumado el delito de secuestro con grave daño, desde que a la víctima ya se le había mantenido encerrada de manera antijurídica, e incluso ya estaba fallecida, sin que exista una conexión del actuar del procesado Leva con la vulneración de la libertad de la víctima. Además, cabe presumir del reconocimiento del acusado Leva que éste tuvo conocimiento del hecho delictivo del secuestro, en cuanto conoció que el detenido Lazcano estuvo a cargo del funcionario policial Bustos en el calabozo y que en ese lugar éste falleció. Como se ha expresado en la jurisprudencia, para que se configure el encubrimiento, no es necesario que se conozcan los detalles materiales relevantes, con tal que esté demostrado, como ha ocurrido en la especie, que el encubridor al menos se represente la posibilidad de la existencia del hecho punible. En concepto de este sentenciador, las actuaciones posteriores del encubridor, se adecuan a las modalidades 2ª y 3ª del artículo 17 del Código Penal, dado que sus actos estaban destinados a la ocultación de los rastros o huellas del delito y porque silenció el hecho en el que actuó Bustos al mantener encerrado al detenido en el calabozo y morir en aquel lugar, de manera que la acción desplegada por Leva tuvo por fin impedir el descubrimiento del culpable, logrando que al menos Bustos, en su calidad de autor material del delito de secuestro se colocara al margen de la justicia”;



13°) Que, abordando los recursos de casación intentados, cabe señalar que la primera infracción denunciada supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado conforme lo determine el sentenciador -la que, como se lee en el considerando anterior, fue de encubridor- sin embargo, acto seguido denuncian la infracción contemplada en el 546 N°7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que por el contrario acepta al esgrimir la primera causal.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017 y N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021).

En efecto, los vicios que constituyen las causales invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte;

14°) Que tal forma de fundar las causales deducidas, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto, como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial



en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta fundamentos y peticiones alternativas y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio;

15°) Que la jurisprudencia a este respecto es numerosa y sostenida, contando con decisiones muy recientes, que otorgan sólido respaldo a lo que se resuelve en estos casos, que es el rechazo de los recursos por razones que, si bien son formales, no pueden ser obviadas por esta sala, atendida la función que le está encomendada como tribunal de casación.

Por tal motivo los recursos no pueden prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16, 141 y 390 del Código Penal, 10, 500, 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, **se decide que:**

I. Se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado por el abogado Miguel Alfonso Alfaro Cortes, en representación del sentenciado Ángel Nicanor Bustos Farías, en contra de la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por la abogada Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y por el abogado Francisco Félix Bustos Bustos, en representación de la querellante doña María Alejandra Lazcano Campos, en contra de la misma sentencia que la señalada en lo resolutivo n° I.



Se previene que el abogado integrante, Sr. E. Gandulfo, concurre al fallo rechazando el recurso de casación en la forma, teniendo en consideración lo siguiente:

1. Que, el recurso de casación es uno extraordinario y de Derecho estricto, por lo sólo procede en las circunstancias expresamente previstas por la ley, esto es, contra resoluciones y causales específicas, sin que pueda dársele una interpretación extensiva o analógica.

2. Que, de conformidad al artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, las disposiciones sobre procedencia del recurso de casación en materia criminal se remiten a las normas del Código de Procedimiento Civil, en lo que no sean contrarias a lo previsto en el Título X del “Recurso de Casación” del Código inicialmente mencionado.

3. Que, el recurso sólo procede en contra de sentencias definitivas y las interlocutorias que pongan término al juicio o que hagan imposible su continuación, de conformidad al inciso primero del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, situación que no ha ocurrido, según lo reconoce el propio recurso, con la sentencia que resolvió la casación forma contra la que se reclama.

En efecto, señala el recurso: *“La sentencia de alzada entre los considerandos primero al tercero y bajo el epígrafe “EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA”, NO analiza de forma alguna los argumentos y causales que sirvieron de base para el señalado recurso respecto de la sentencia de primer grado”* (pág. 2 y 3 del libelo del sentenciado).

Además, denota un error técnico de comprensión el recurso que confunde dos cosas: el documento resolutivo y las sentencias en él contenidas. Es así que



un documento resolutivo puede englobar distintos tipos de sentencia que no por dictarse al final del grado jurisdiccional constituyen sentencia definitiva. Ello porque el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la sentencia definitiva es aquella que resuelve el asunto objeto del juicio, es decir, la acusación (o la demanda en sede civil) o la apelación, es decir, las cuestiones de mérito. Cómo es sabido, el documento resolutivo puede contener decisiones que no sean sentencias definitivas, como la resolución de costas, sobre competencia, o el propio recurso de casación, sin que se califique ninguna de ellas como una sentencia de alza o apelación, que es precisamente, esta última respecto de la cual puede dirigirse el recurso de casación.

4. Solo excepcionalmente puede procederse a conocer de un recurso de casación en la forma respecto de una sentencia dictada en segunda instancia, y sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar el día para la vista de la causa, como dispone la parte segunda del inciso primero del artículo 766 del Código adjetivo civil, ello tampoco es el caso. Si bien es dudoso que la ley esté refiriéndose a la casación ante tribunal de alzada, en el mejor de los casos, el recurso de casación en examen se dirige por la causal de no haber sido extendida la sentencia impugnada de conformidad con la ley, equivocando, entonces, el recurrente su causal.

Redacción del Ministro señor Llanos S. y de la prevención, su autor.

Rol N ° 68.531-2023



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., la Ministra (s) Sra. Dobra Lusic N., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B. y Eduardo Gandulfo R No firma la Ministra (s) Sra. Lusic, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a diez de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

